JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO ORAL

Medellín, nueve (9) de junio de dos mil catorce (2014)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – LABORAL
Demandante: GUILLERMO ANTONIO CARDONA OSPINA
Demandado: MUNICIPIO DE GIRARDOTA Y OTRO
Radicado: 05-001-33-33-~~009~~-2014-~~00302~~
Asunto: Resuelve Recurso de Reposición.

Por auto del 28 de abril de 2014, este Despacho declaró su falta de competencia para conocer el proceso de la referencia y ordenó remitir el expediente al Juzgado Civil del Circuito de Girardota, por lo que inconforme con esta decisión, la parte demandante, mediante escrito recibido en la Oficina de Apoyo Judicial de los Juzgados administrativos el 29 de abril de 2014 interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación (folios 47 a 50).

Al recurso interpuesto se le imprimió el trámite establecido en el artículo 349 del Código de Procedimiento Civil, guardando la parte demandada silencio al respecto.

Procede el Despacho a resolver el recurso de reposición, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1. El recurrente sustenta la reposición indicando que de la lectura del artículo 104 numeral 4 del CPACA se puede extraer que los Jueces Administrativos conocen de la seguridad social de los servidores públicos sin importar si pertenecen a un régimen especial o no, además dispone que dicho régimen este administrado por una persona de derecho público que para el caso concreto es el Municipio de Girardota y Colpensiones.
2. Que es claro que la Jurisdicción contencioso administrativa es la que deba conocer del proceso de la referencia, por cuanto la pensión de vejez que se pretende liquidar fue reconocida en aplicación del régimen de transición de la Ley 33 de 1985, régimen pensional de los empleados públicos.
3. En cuanto a la afirmación de que la relación laboral del servidor público está dado por un contrato de trabajo, lo que ocasiona que su calidad es de un trabajador oficial, se recuerda que en materia pensional no existe distinción en la aplicación de la normatividad puesto que esta no diferencia si el empleado público se encuentra vinculado bajo nombramiento de carrera o contrato de trabajo.

4. Así mismo para los efectos de la Ley 33 de 1985 se entienden empleados oficiales los empleados públicos, nombrados o elegidos, los trabajadores oficiales y funcionarios de seguridad social; como se puede observar esta Ley incluye los trabajadores oficiales en su aplicación, por lo tanto no es válido que se argumente la existencia del contrato de trabajo para alegar la falta de competencia.
5. Para resolver el recurso se hace necesario precisar que las personas que prestan servicio al Estado reciben el nombre genérico de SERVIDORES PUBLICOS, estos se dividen en dos categorías denominados empleados públicos y trabajadores oficiales **de acuerdo con la relación jurídica que los vincula con la administración.**

Se denominan **empleados públicos** los funcionarios que se vinculan a la administración mediante una **relación legal y reglamentaria**, y **trabajadores oficiales** quienes lo hacen mediante una **relación de carácter contractual, como lo hacen los trabajadores del sector privado.**

La noción de servidor público la consagra la Constitución de 1.991 en los artículos 6, 122, 123, 124, 126, 127 y 129, sugiere la idea de la asignación y cumplimiento de funciones estatales por una persona natural, a través de un vínculo jurídico que implica o no subordinación laboral.

Indica el artículo 123 de la Carta Política, *“son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios”*; El artículo 125 establece que *“Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley”*.

6. Es cierto que la esta Jurisdicción es competente para conocer de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa, además de los procesos relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el estado y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen este administrado por una persona de derecho público, como en este caso lo es Colpensiones.

Sin embargo, teniendo en cuenta la escueta diferenciación realizada en líneas anteriores, el recurrente no tuvo en cuenta que expresamente el artículo 105 del CPACA señala que esta Jurisdicción no conoce de los conflictos de carácter laboral surgidos entre entidades públicas, como lo son el Municipio de Girardota y Colpensiones, y SUS TRABAJADORES OFICIALES.

7. Con el fin de establecer si este Despacho era competente o no para conocer el asunto de la referencia, no se tuvo en cuenta que régimen pensional que se le aplicó al demandante al momento del reconocimiento de la pensión por parte del ISS, para ese entonces, ni cuál es el régimen legal que se estudiaría para determinar si procede o no la reliquidación de la misma; PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA EN ESTE CASO, SE TUVO EN CUENTA LA CLASE DE VINCULO LABORAL DEL SEÑOR CARMONA OSPINA, con el municipio de Girardota.
8. En efecto, independientemente de que la citada prestación fuera reconocida en aplicación del régimen de transición dispuesto en la Ley 33 de 1985, el demandante se vinculó al Municipio de Girardota desde el 16 de enero de 1978 al 11 de agosto de 1997 sin interrupciones, como OBRERO, bajo la convención colectiva de trabajadores Oficiales de tal Municipio.
9. Por lo anterior, de acuerdo a la definición de trabajador oficial y la forma de vinculación a la administración pública, que es mediante contrato de trabajo, se le dará aplicación al artículo 105 numeral 4 del CPACA que señala que los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y trabajadores oficiales NO SON DE COMPETENCIA DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, pero sí de la Jurisdicción laboral como lo determina el artículo 2 de la Ley 701 de 2001.

Conforme a lo expuesto, este despacho NO REPONDRÁ el auto proferido el día 28 de abril de 2014, por medio del cual declaró la falta de competencia para conocer el asunto de la referencia.

El apoderado de la parte demandante, también interpuso el recurso de apelación en subsidio al de reposición, frente al auto del 28 de abril de 2014, sin embargo este recurso **no se concederá por improcedente**, ya que las providencias que declaren la falta de competencia no son apelables, pues no se encuentra en el listado del artículo 243 del CPACA, ni el artículo 168 ibídem contempla el recurso de apelación, frente a las mismas.

En merito de lo expuesto, el **JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN,**

RESUELVE

PRIMERO: NO REPONER LA PROVIDENCIA PROFERIDA EL 28 DE ABRIL DE 2014, mediante la cual se declaró la falta de competencia para conocer el asunto de la referencia, por lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: NO CONCEDE el recurso de apelación por improcedente.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, se dispone remitir el expediente al Juzgado Civil del Circuito de Girardota, para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE

FRANCY ELENA RAMIREZ HENAO
Juez

NOTIFICACIÓN POR ESTADO

JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN

CERTIFICO: En la fecha se notificó por ESTADO el auto anterior.

Medellín, _____. Fijado a las 8.00 a.m.

Secretaria